

Columna

Laura Bertolotto Navarrete
Rectora Santo Tomás Valdivia

Financiamiento de educación Superior

Un reciente reportaje de El Mercurio reabrió un debate que nunca se ha ido del todo: el financiamiento de la educación superior en Chile. En este sentido, la situación de autoridades con deudas vigentes por créditos como el CAE o el Fondo Solidario no solo interpela a quienes ejercen cargos públicos, sino que también invita a mirar el sistema en su conjunto. No obstante, antes de cuestionar, vale la pena recordar por qué estos instrumentos existen.

Tanto el Crédito con Aval del Estado (CAE), con garantía estatal y financiamiento a través de la banca, como el Fondo Solidario, administrado por las propias universidades (CRUCH), nacieron para ampliar el acceso a la educación superior en un país donde, por mucho tiempo, estudiar era un privilegio. Sin duda, para miles de familias, estos mecanismos representaron una oportunidad concreta de movilidad social.

En la actualidad, dicho propósito sigue siendo relevante. La educación es un motor de desarrollo personal y social, y estos sistemas han contribuido a la generación de posibilidades para miles de personas.

Sin embargo, con el tiempo también han surgido desajustes. Las condiciones de estos créditos no siempre dialogan con las trayectorias laborales actuales, marcadas por mayor inestabili-

dad e ingresos variables. En algunos casos, lo que comenzó como una oportunidad se transforma en una carga difícil de sostener.

Reconocer estas brechas no es negar su valor, sino asumir que requieren ajustes.

En este contexto, también es importante reafirmar un principio básico: los compromisos adquiridos deben cumplirse. El pago de estos créditos no solo es una obligación legal, sino también un acto de responsabilidad que permite que el sistema siga funcionando y beneficie a nuevas generaciones.

Cuando el sistema no logra recuperar los recursos, no solo se tensiona su sostenibilidad, sino que también se limita su capacidad de seguir abriendo oportunidades a nuevas generaciones.

Por lo tanto, más que centrarse en casos particulares, el debate invita a una reflexión de fondo, ya que Chile necesita un sistema de financiamiento que mantenga el acceso, pero que también sea justo, flexible y acorde a la realidad de las familias.

En dicho marco, el desafío no es solo cuestionar el pasado, sino mejorar hacia adelante. Porque invertir en educación sigue siendo una de las decisiones más importantes para el desarrollo del país, y asegurar que ese camino sea sostenible es una tarea prioritaria.